

interdependencia esencial entre lo económico y lo mental.

Delimitado con esta amplitud, el objeto de estudio abarca realidades que van desde el lenguaje hasta las visiones del mundo y ofrece una alternativa ante los excesos de la historia económica. Y si bien los tres autores anteriormente mencionados realizan el primer trabajo sistemático, profundamente influido por la sociología y sicología social, hay que recordar otras investigaciones más o menos con esta perspectiva. Como los trabajos de Althusser sobre las articulaciones de la ideología dentro de una formación económico social, los del etnólogo Godelier, o la teoría de Paul Ricoeur para quien "los problemas políticos se resisten a las modificaciones de la infraestructura".

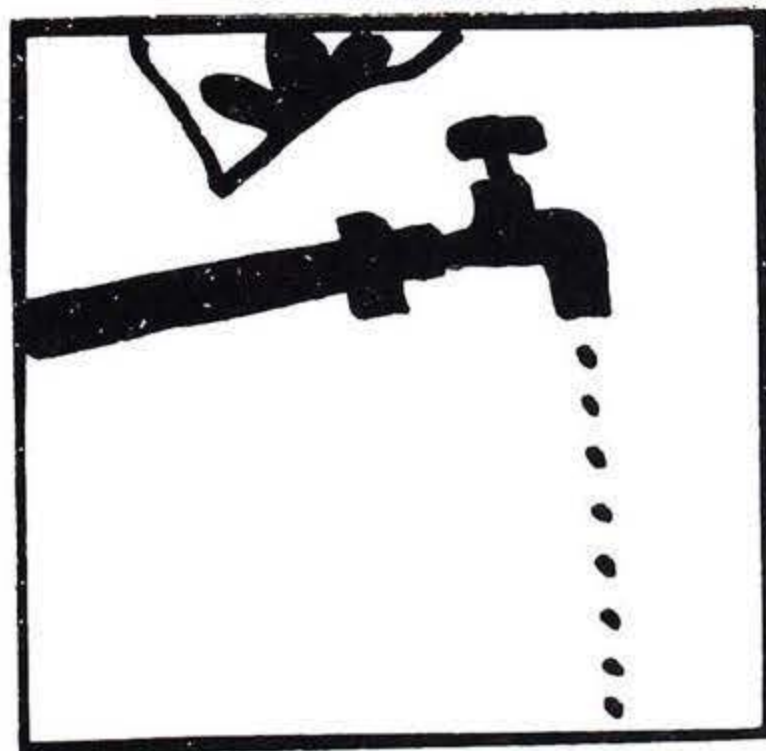
El interés por esta zona de lo real, de tan poca tradición en la historia colombiana, parece haber sido la perspectiva con que se realizó este seminario-taller del Cinep sobre cultura y política.

Decimos "parece", puesto que, aunque en el prólogo se habla de "Adelantar una reflexión interdisciplinaria acerca de las relaciones entre distintas esferas de la cultura (la religión, la vida cotidiana, la psicología social, los *imaginarios* y las *mentalidades*, los procesos étnico-culturales, los fenómenos comunicativos, la identidad nacional, la estructura familiar, etc.) y la política", sin embargo no se presenta, en ningún momento, la exposición de los presupuestos teóricos que enmarcaron el seminario. Es decir: términos como *mentalidad*, *imaginario colectivo* o *cultura política*, por ejemplo, son usados frecuentemente por los distintos autores sin que se explique claramente su acepción determinada y si hay consenso o no acerca de ella; cosa de la que a veces puede dudarse por los diferentes enfoques y el dispar grado de profundidad e investigación de los ensayos. Así encontramos estudios sobre la mentalidad (el de María Victoria Uribe), al lado de otros sobre la ideología (el ensayo de Roche y el del historiador Ayala sobre el Anapismo) y hasta "psicoanálisis" de las costumbres (el del psicoanalista Gutiérrez) o estadísticas

(el estudio de psicología política de Ocampo) de psicología social, entremezclados indiscriminadamente.

La antropóloga María Victoria Uribe, por ejemplo, presenta un fundamentado estudio de la mentalidad de la época de la Violencia titulado "El bipartidismo como encubridor de la venganza de la sangre". En él expone una versión innovadora de este período histórico. Opone a la interpretación tradicional, que ve allí una confrontación intraclasista, reflejo, en el campo, de dos subculturas nacionales (la conservadora y la liberal); la manifestación de una historia distinta, residual, de carácter veredal y tribal. En los fenómenos sociológicos de la Violencia, el campesino habría estado creando una identificación grupal, cuya raíz, en el fondo, pocos se relacionaban con la estructura bipartidista propuesta por el país oficial, el de los medios de comunicación, y se hundía, en cambio, en intrincadas motivaciones rituales y míticas, como lo atestiguan los expedientes oficiales de las innumerables matanzas de la época.

De la Roche, por su parte, se centra en el estudio de la ideología (entendida como un cuerpo de ideas coherentes y sistemáticas de una clase) de las elites políticas colombianas. Analiza la relación de la religión y la conformación de la estructura bipartidista en Colombia, la "institucionalización de la intolerancia" a partir de la Regeneración, entre otros fenómenos.



Pero al lado de trabajos sistemáticos como estos encontramos, amparados en la indeterminación del campo de la investigación, y en la

falta de claridad de la interdisciplinaria deseada, otros ensayos en los que hay una evidente ausencia de método y un desconocimiento de las motivaciones y relaciones entre lo económico, social y cultural.

Este es el caso del trabajo "Psicoanálisis de las costumbres políticas colombianas", de José Gutiérrez, donde se produce una serie de lugares comunes (el psicoanálisis del manzanillo, del lagarto, etc.), de abstracciones, de enumeración de estereotipos que no llevan a ninguna conclusión y ni siquiera siguen los criterios de la teoría psicoanalítica. El deseo de realizar un análisis más allá de lo económico de este tipo de fenómenos no puede ni debe justificar la improvisación.

A pesar de esta disparidad de los ensayos, el libro avanza en una línea investigativa que enriquece el estudio incipiente en Colombia de las mentalidades, el cual, como los mismos autores lo afirman es "imprescindible e inaplazable" para poder comprender nuestra especificidad cultural.

SOL ASTRID GIRALDO E.

La "ideología de la paz" sistematizada

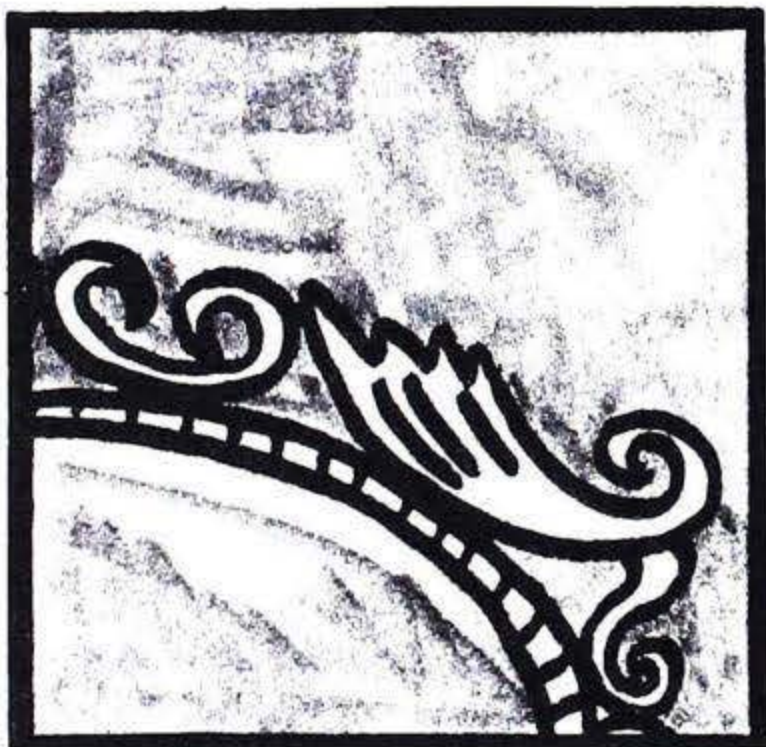
Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80.

Francisco Leal Buitrago y Leon Zamosc (comps.)

Tercer Mundo—Universidad Nacional, Bogotá, 1990, 514 págs.

Bajo este título, Francisco Leal y Leon Zamosc publican, como compiladores, 13 trabajos sobre el candente tema. El libro, cuyo tremendo interés polémico es incuestionable, es el resultado de una conferencia realizada a fines de 1989 en San Diego, en la Universidad de California, auspiciada por institutos de investigación de esta universidad y la Universidad

Nacional de Colombia. Sistematiza lo que bien podría llamarse la "ideología de la paz" como concepción de conjunto sobre el turbulento proceso que viene padeciendo el país en los últimos tiempos. Entre los autores se destacan, además de los propios compiladores, los colombianos Eduardo Pizarro, Ana María Bejarano, Jorge Orlando Melo, Salomón Kalmanovitz, Rocío Londoño y los estadounidenses Gary Hoskin y Francisco E. Thoumi. Tras una parte general que ensaya una explicación global de la crisis colombiana, se examina el comportamiento de las distintas fuerzas del país agrupadas como "actores institucionales" (partidos, militares, Iglesia, gremios, sindicatos) y "actores sociales" (campesinado, grupos armados, narcotráfico, etc.). La lectura del texto revela que una común concepción sobre el desenvolvimiento político y social de la Colombia reciente atraviesa los estudios recopilados; acaso ello exima de reseñar cada uno de los trabajos en detalle y aconseje más bien relevar los contornos de la aludida visión general.



Salta a la vista, en cuanto a la causa de la violencia en el período del Frente Nacional, el criterio de que todo procede de una "crisis de legitimidad" del régimen. La que, vagamente definida, consistiría en la falta de credibilidad y confianza de la "sociedad civil" —el país— hacia el gobierno y más laxamente respecto de las instituciones imperantes. Fenómeno que se describe como "deslegitimación" y cuyo origen estaría en las graves restricciones a la participación política impuestas por el monopolio bipartidista tradicional

del poder, razón por la cual amplias demandas sociales habrían sido represadas sin alcanzar una expresión institucional normal. La violencia guerrillera habría surgido así como el efecto más protuberante y desestabilizador del orden frentenacionalista. Cualquier colombiano de las generaciones de posguerra puede dar fe de los recortes que conllevó para la democracia la instauración del Frente Nacional. Lo que puede resultar fuertemente cuestionado es la premisa de que la violencia de los grupos armados conformó precisamente la expresión de las luchas sociales obstruidas institucionalmente. Asunto de importancia crucial, puesto que ello implicaría, si se acepta la premisa en cuestión, una especie de justificación-por-la-vía-de-la-explicación, una "legitimación" de la violencia guerrillera a posteriori, que es la impresión que dejan algunos pasajes de los artículos centrales del libro. O, por el contrario, si se rechaza, tal justificación no sólo se descartaría sino que la eficacia de la acción violenta como pretendida expresión de las luchas sociales, en las condiciones de la Colombia actual, quedaría reducida al catálogo trágico de las aventuras extremistas.

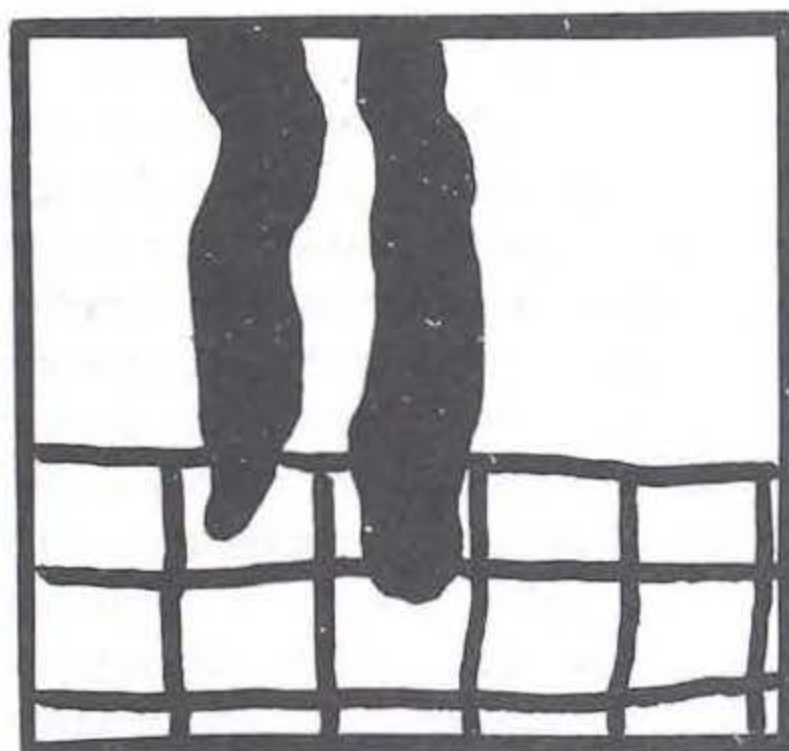
Otra tesis sostenida en el libro, cuya demostración en rigor no ofrece ninguno de los estudios que trae, es la de que, dándose una "incapacidad mutua para derrotarse" entre el Estado y las guerrillas, lo que sigue necesariamente, como única salida a la confrontación, es la negociación. Negociación que, según afirma uno de los autores, no debe circunscribirse a las razonables garantías para que los integrantes de las agrupaciones armadas desmovilizadas ejerzan sus derechos políticos y civiles en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos. Contrariamente, se sostiene, la negociación tiene que ligarse indisolublemente a la reforma política del Estado y a las reformas económico-sociales. Ligazón problemática, según se ha visto. Ha entrado para las organizaciones negociadoras no simplemente el normal y deseable acceso a la lucha política legal sino muy claros privilegios políticos, lo cual no viene a ser precisa-

mente una ejemplar reforma del régimen de "democracia restringida" que se dice querer superar. Sin mencionar que, de hecho, implica otorgarles a las agrupaciones armadas negociadoras una representación de intereses vitales concerniente al conjunto de la población que, ciertamente, ésta no les ha confiado. Y otro problema, de no menor significación práctica, es que, si se condicionan los cardinales asuntos del desarme y la desmovilización a la realización de las reformas económico-sociales, la negociación puede tornarse indefinida, habida cuenta que, en general, tales cambios conllevan un período considerablemente largo.

Otro supuesto básico del estudio se agrupa en un "paquete" de afirmaciones muy relacionadas. Una de las más reiteradas se refiere a la "teoría de la seguridad nacional", como inspiradora del enfoque militar oficial sobre el conflicto armado, que atribuye éste exclusivamente a la acción de la "subversión internacional" negando toda causalidad a los factores económico-sociales de carácter nacional. Otra atribuye al acento fuertemente represivo del gobierno de Turbay Ayala el resurgimiento de las guerrillas al finalizar la década de los años setenta, cuando estas habían llegado a una etapa de "crisis y desagregación". La primacía de las fuerzas armadas en el manejo del orden público, así como el papel de los partidos tradicionales, del Congreso, los gremios económicos y los grupos paramilitares, se señalan como los principales obstáculos a la meta pacificadora de la negociación política oficial con las agrupaciones armadas. Fueron los gobiernos de Belisario Betancur y de Barco los que posibilitaron, se remata, el inicio y los primeros logros en tales negociaciones al cambiar la concepción oficial sobre la violencia en el país. Tales, muy escuetamente expuestas, las más sobresalientes apreciaciones de los autores de *Al filo del caos* sobre la convulsionada época colombiana de los años ochenta. Sobre la primera podría observarse que la "teoría de la seguridad nacional", elaborada por Estados Unidos en los comienzos de la "guerra fría" y obviamente "ins-

crita en el conflicto este-oeste", efectivamente reduce el asunto a un anti-comunismo hirsuto. Pero ningún examen pasablemente serio del escenario internacional de posguerra puede omitir el papel determinante desempeñado por el agresivo expansionismo soviético en el curso de los acontecimientos mundiales, por lo menos hasta mediados de los ochenta, particularmente en o a través de Cuba, Vietnam, Angola, Etiopía, Yemen del Sur, Afganistán, Nicaragua, Granada, etc. Colombia no fue ajena a estas realidades; episodios como la ayuda cubana en el desembarco del río Mira, las armas nicaragüenses halladas en los escombros del Palacio de Justicia y el incidente diplomático con Nicaragua a raíz de su reclamación sobre San Andrés y Providencia dan fe de ello. Curiosamente, este aspecto no ocupa más allá de un par de renglones del sesudo estudio de los analistas. Sobre el "auge" guerrillero que se atribuye, entre otros factores, a la represión en el gobierno de Turbay, puede acotarse que —como lo registra uno de los estudios del libro— al finalizar ese período presidencial "el M-19 se encuentra al borde de la derrota militar". Si algo se inició, fue con la llegada de Betancur a la Casa de Nariño. Quien dejó claro, con la remoción del ministro de Defensa, que la presunta "autonomía militar", si la hubo, ahora era poco menos que una fábula. Es cierto que sectores del liberalismo y el conservatismo hicieron reparos a la política de pacificación dialogada del gobierno de Betancur pero fueron muy minoritarios; el grueso de ambos partidos votó en el Congreso a favor de las iniciativas presidenciales de la amnistía y el indulto. Y la misma "clase política" aprobó un nuevo "perdón y olvido" para el M-19 ya en el gobierno de Barco. En cambio, los gremios económicos opusieron en su mayoría una resistencia —ora abierta, ora velada— al tipo de negociaciones adelantadas con los grupos armados y, tal como se reseña en el estudio, contra "el proyecto neoliberal" en materia económica de los gobiernos de López Michelsen y de Turbay Ayala, que se renovó "acerbamente" al final del gobierno de

Barco. Nada de lo cual abona, ciertamente, la tesis de uno de los trabajos del estudio, que, siguiendo la de Daniel Pécaut, ve en los gremios el "anclaje principal" del régimen. En cuanto a los denominados grupos paramilitares, se enfatiza en que terminaron por caer bajo la influencia del narcotráfico luego de iniciarse con apoyo de mandos militares regionales y de ganaderos. Y enseguida se observa agudamente que las auto-defensas del Magdalena medio se organizaron como respuesta a la práctica de la extorsión y los secuestros llevados a extremos insufribles contra amplios sectores de la población por uno de los frentes guerrilleros. En la misma línea cabe hacer resaltar un vaticinio consignado por otro de los autores, que los hechos vienen confirmando ampliamente: la continuación de las acciones violentas de los grupos armados sólo acentuará más rápidamente el reflujo y la pérdida de influencia de los mismos entre la población civil.



Sin duda que *Al filo del caos* será un texto de principal interés, no sólo entre los académicos y estudiosos de las ciencias sociales, sino también para los políticos profesionales. Un texto utilísimo para esclarecer la naturaleza de la llamada "repolitización" de la sociedad colombiana. No en vano las tesis y nociones que expone han sido una suerte de doctrina oficial desde el gobierno de Betancur hasta nuestros días.

PEDRO YUDES

Buen relato, flojo análisis

Relaciones colombo-británicas de 1823 a 1825: según los documentos del Foreign Office.

Antonio Vittorino

Ediciones Uninorte, Barranquilla, 1990, 120 págs.

El objetivo primordial del profesor Vittorino es la identificación, muestra e interpretación de aquellos hechos preliminares que influyeron en la tan esperada decisión del gobierno británico de establecer relaciones diplomáticas con nuestro país, reconociéndolo como estado, "con todos los derechos y obligaciones que tal concepto encierra: entidad política soberana, autónoma, con territorio y población definidos, autodefensible y responsable de sus actos y el de sus ciudadanos" (pág. I).

Puede decirse, sin incurrir en equívocos, que la investigación realizada fue extensa y exhaustiva, por lo menos en cuanto a las fuentes primarias inglesas, pese a la poca bibliografía que trata el tema, pues éste en ocasiones ha sido integrado "como parte de un esquema muy amplio —relaciones intercontinentales o historias políticas o económicas del siglo XIX— o lo tratan tangencialmente y como incidente acontecido alrededor de una persona u otro tema —biografía o historia de un período—" (pág. I).

El autor extrajo del Public Record Office (Archivo Nacional inglés) aquellos documentos que se guardan en la sección destinada al Foreign Office (Secretaría de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña), y hace con ellos una labor de filigrana y amalgama, llevándonos de la mano hasta el despacho de los ministros de relaciones exteriores ingleses Castlereagh y Canning. También nos sitúa ante aquellas cartas que escribieron algunos colombianos, ante la preocupación de los comerciantes ingleses y la inestabilidad del apoyo del gobierno nacional a los empréstitos negociados por Francisco Antonio Zea y